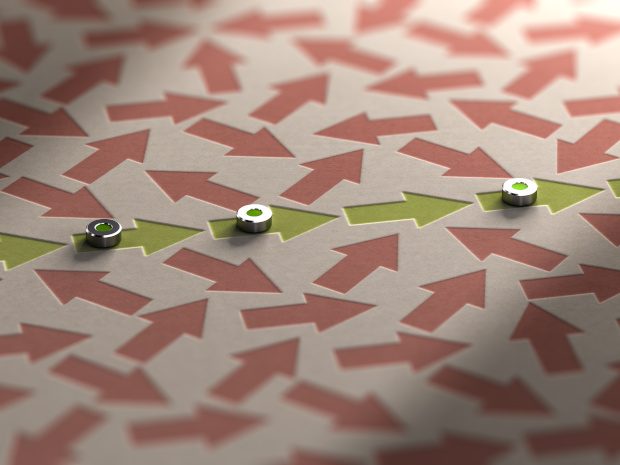
Cronología de la sostenibilidad de la UE a partir de la ESMA

Publicado el marzo 4, 2022



Hay mucho que está sucediendo en términos de informes de sostenibilidad en la UE en este momento, por lo que es un poco difícil hacer un seguimiento. Afortunadamente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha publicado un calendario de implementación de finanzas sostenibles muy útil, que cubre el Reglamento de Divulgación de Información de Finanzas Sostenibles ([SFDR](https://www.xbrl.org/tag/sfdr/)), la Taxonomía de la [UE](https://www.xbrl.org/news/how-green-is-your-power/), la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa ([CSRD](https://www.xbrl.org/tag/csrd/)) y otra legislación con implicaciones relacionadas con la sostenibilidad. Se centra en el próximo año, así como en mirar hacia adelante en los desarrollos clave en 2024.

Para aquellos que necesitan más información sobre dónde se encuentra la UE con sus diversas iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), también encontramos una publicación reciente de WilmerHale (a través de Toppan Merrill) muy útil para establecer fechas y detalles clave.

Lea más [aquí](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sustainable_finance_-_implementation_timeline.pdf) y [aquí](https://blog.toppanmerrill.com/insights-blog-all/esg-the-eus-agenda-for-2022-what-you-need-to-kno).

[ESG](https://www.xbrl.org/tag/esg/) [ESMA](https://www.xbrl.org/tag/esma/) [SOSTENIBILIDAD DE LA UE](https://www.xbrl.org/tag/eu/)

OTROS POSTS



ESG: La Agenda de la UE para 2022 - Lo que necesita saber

Por [WilmerHale](https://blog.toppanmerrill.com/insights-blog-all/author/wilmerhale) el 24 febrero, 2022

El año 2021 fue prolífico para el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) en la UE. El año 2022 parece igual de productivo para el legislador de la UE.

Las empresas deben cumplir con las crecientes obligaciones relacionadas con ESG. También deben hacer todo lo posible para cumplir con los requisitos para que sus negocios califiquen como sostenibles y sean notados por los inversores en el mercado de la UE.

También se están preparando muchas iniciativas legislativas de la UE para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos y el medio ambiente, lo que implica posibles obligaciones adicionales para las empresas, así como para sus cadenas de suministro.

Estos son los principales desarrollos que debe monitorear en 2022 y el impacto de dichas regulaciones ESG en la política antimonopolio y la aplicación.

**Comienza a aplicarse el Reglamento de Taxonomía de la UE**

A finales de 2021, se publicaron dos actos delegados de la Comisión Europea (Comisión) en el Diario Oficial de la UE, que permiten que el Reglamento sobre taxonomía de la UE se aplique a partir del 1 de enero de 2022 ([**véase la alerta anterior**](https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20211217-one-more-step-towards-sustainable-finance-in-the-european-union)).

El [**primer acto**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC) delegado establece los criterios técnicos de selección (CTT) para determinar si una actividad económica contribuye sustancialmente a la mitigación y adaptación al cambio climático. La mitigación y adaptación al cambio climático son dos de los seis objetivos establecidos en el Reglamento de Taxonomía de la UE, el principal instrumento de la UE para canalizar el dinero de los inversores hacia actividades sostenibles y alcanzar los objetivos climáticos del bloque.

Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2022, las empresas que lleven a cabo una de las actividades enumeradas en el presente acto delegado podrá utilizar la CTS para determinar e informar/divulgar si sus actividades son admisibles y están en consonancia con la taxonomía de la UE en lo que respecta a los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático (siempre que dichas actividades no perjudiquen a ninguno de los demás objetivos de la taxonomía de la UE).

El [**segundo acto**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN) delegado se refiere a las obligaciones de las empresas de revelar cómo y en qué medida sus actividades están asociadas a actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental (artículo 8 del Reglamento sobre taxonomía de la UE). El acto delegado del artículo 8 establece un régimen simplificado de divulgación durante un período transitorio que abarca el año 2022. Por lo tanto, las empresas deben informar solo sobre ciertos elementos (con respecto a la elegibilidad de la taxonomía) a partir del 1 de enero de 2022.

**Actividades nucleares y de gas incluidas en la taxonomía de la UE para la adaptación al cambio climático y los objetivos de mitigación**

El 2 de febrero de 2022, la Comisión presentó su [**Acto**](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf) delegado Complementario (CDA) sobre mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, que abarca determinadas actividades nucleares y de gas.

Las actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas deben cumplir con el CSC establecido en el CDA para que se considere que contribuyen a la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, tras el cumplimiento de ciertas condiciones, estas actividades podrían incluirse en la Taxonomía de la UE. El CDA también introduce requisitos específicos de divulgación para las empresas activas en los sectores del gas y la energía nuclear para proporcionar total transparencia a los inversores.

Sin embargo, el CDA sigue sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo (Parlamento) y del Consejo de la Unión Europea (Consejo). Tendrán cuatro meses a partir de la adopción formal de la Comisión para examinar el CDA y posiblemente rechazarlo. La agrupación de gas y energía nuclear por parte de la Comisión en un solo instrumento probablemente garantiza que no habrá suficientes votos en el Consejo para reunir la mayoría cualificada reforzada (al menos 20 Estados miembros de la UE que representan al menos el 65 % de la población de la UE) para bloquearla. Se espera más oposición del Parlamento, que puede objetar por mayoría absoluta de sus miembros.

Las empresas con actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas deben prepararse comprobando si cumplen la CGT establecida en el CDA, tal como puede ser aplicable a más tardar el 1 de enero de 2023, o en su próximo período de notificación. La adopción del CNC será decisiva para financiar estas actividades de alto costo.

**Actos delegados de taxonomía por los que se establece la CTS aplicable a los restantes objetivos de la UE en materia de taxonomía**

También se requieren actos delegados para establecer la CET con respecto a los cuatro objetivos taxonómicos restantes de la UE (es decir, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la prevención y el control de la contaminación, y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas).

En virtud [**del Reglamento sobre taxonomía de la UE**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852), la Comisión debía adoptar los actos delegados pertinentes a más tardar el 31 de diciembre de 2021 para una solicitud a partir del 1 de enero de 2023. Si bien se incumplió ese primer plazo, el asesor de la Comisión, la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (Plataforma), publicó en 2021 su proyecto de informe sobre las recomendaciones preliminares para estas ETS y pidió comentarios de las partes interesadas. La Plataforma está revisando actualmente estos comentarios antes de presentar su informe final a la Comisión. A continuación, la Comisión podrá preparar los actos delegados pertinentes por los que se establece la CST en relación con estos cuatro objetivos restantes.

Los proyectos de actos delegados de la Comisión deben publicarse en torno a junio de 2022 y, a continuación, ser revisados tanto por el Consejo como por el Parlamento; no está claro si todavía se contempla una solicitud a partir del 1 de enero de 2023.

Las empresas deben estar listas para verificar si sus actividades cumplirán con el próximo TSC y ya deben recopilar los datos relevantes.

**Obligaciones de divulgación de las empresas en virtud del SFDR**

El aumento de las obligaciones de divulgación se aplica a los participantes en los mercados financieros y a las empresas de la UE.

[**El Reglamento sobre la divulgación de información sobre las finanzas sostenibles**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088) (SFDR) establece obligaciones de divulgación que se aplican a los asesores financieros y a los participantes en los mercados financieros (empresas de seguros de gestores de fondos, empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que prestan servicios de gestión de carteras).

Las divulgaciones de nivel 1 se aplican desde marzo de 2021 (es decir, la divulgación de información sobre las políticas de los participantes en los mercados financieros sobre la identificación y priorización de los principales impactos adversos en la sostenibilidad).

Las divulgaciones de nivel 2 son requisitos de divulgación más detallados que se suponía que se aplicarían a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, la Comisión ha retrasado la aplicación de las obligaciones de divulgación de nivel 2 porque no ha podido adoptar las normas técnicas de regulación (RTS) pertinentes. El proyecto de RTS fue presentado a la Comisión por las Autoridades Europeas de Supervisión en dos tramos en febrero de 2021 y octubre de 2021, lo que, según la Comisión, no dejó tiempo suficiente para una revisión adecuada. Por lo tanto, la Comisión ha anunciado que la aplicación de las divulgaciones de nivel 2 se aplaza hasta el 1 de enero de 2023.

No obstante, los participantes en los mercados financieros ya deben prepararse para dicha divulgación, en particular recopilando todos los datos pertinentes.

**Propuesta de CSRD**

En abril de 2021, la Comisión propuso una [**Directiva sobre información sobre sostenibilidad de las empresas**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189) (CSRD) para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de la UE sobre información no financiera (NFRD) ya en vigor.

La propuesta amplía el alcance de los requisitos de información y las categorías de empresas sujetas a ellos. La CSRD se aplicaría a todas las empresas cotizadas (excepto a las microempresas cotizadas) y a todas las grandes empresas (cotizadas o no) que cumplan dos de cada tres de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 millones de euros, (ii) un volumen de negocios neto de 40 millones de euros y (iii) 250 empleados de media durante el ejercicio. Actualmente, el NFRD solo se aplica a las grandes entidades de interés público (es decir, empresas con valores que cotizan en los mercados de la UE, bancos y compañías de seguros) con un número medio de empleados superior a 500.

El Parlamento y el Consejo están revisando la DSC. Debería acordarse en 2022; la aplicación potencial será a partir de 2024, y las empresas informarán sobre el año fiscal 2023.

Si se adopta, el CSRD marcará un cambio adicional importante en los informes corporativos.

**Futura propuesta de la Comisión sobre la diligencia debida en la cadena de suministro: medio ambiente y derechos humanos**

En un futuro próximo, las empresas activas en la UE también pueden tener que realizar auditorías y llevar a cabo la diligencia debida en todas sus cadenas de suministro para abordar importantes cuestiones relacionadas con esg. La Comisión tiene previsto presentar un proyecto de legislación a principios de 2022 sobre una ley obligatoria de diligencia debida en la cadena de suministro.

La Comisión ya ha adoptado medidas preliminares mediante la publicación de directrices sobre la diligencia debida para que las empresas de la UE aborden el riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro. En este documento de julio de 2021, la Comisión proporciona en particular las consideraciones que son relevantes para las empresas que buscan mantenerse alejadas del trabajo forzoso.

De acuerdo con la guía de la Comisión, las empresas deben monitorear los factores de riesgo de trabajo forzoso que pueden relacionarse con el país involucrado, la situación migratoria, las relaciones laborales informales, las restricciones específicas a los trabajadores, etc. También se mencionan acciones para abordar el trabajo forzoso, como evaluaciones de riesgos en profundidad de proveedores o segmentos de la cadena de suministro, la posibilidad de desvincularse de las relaciones contractuales riesgosas y la comunicación con los gobiernos responsables.

Sobre esa base, las empresas multinacionales deben estar listas para preparar, establecer e implementar protocolos adecuados para tomar medidas adicionales para combatir el trabajo forzoso, incluso controlando sus cadenas de valor.

Cabe destacar que Alemania ya ha adoptado una ley que exige a las empresas con más de 3.000 empleados que realicen auditorías de sus proveedores directos y evalúen los riesgos derivados de los proveedores indirectos en términos de violación de los derechos humanos o la ley ambiental a partir del 1 de enero de 2023. A partir del 1 de enero de 2024, las empresas con más de 1.000 empleados quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de dicha ley.

**Propuesta de la Comisión sobre Derecho penal medioambiental**

En diciembre de 2021, la Comisión propuso [**una nueva Directiva para reforzar la aplicación del Derecho penal medioambiental**](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179760_prop_dir_env_en.pdf). La propuesta se ha presentado al Parlamento, que ya ha pedido sus opiniones a las comisiones pertinentes. La Comisión desea que esta futura Directiva se aplique con un período de puesta en marcha de 2022 a 2025.

Con esa propuesta, los Estados miembros se verían obligados a adoptar medidas de Derecho penal para garantizar una protección más eficaz del medio ambiente. Esto sigue a la conclusión de la Comisión de que existen limitaciones y deficiencias con la Directiva sobre delitos medioambientales de 2008. Curiosamente, la Comisión indica que su propuesta contribuiría al Plan de Acción de Contaminación Cero, el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia de Biodiversidad para 2030, así como a promover el Estado de Derecho medioambiental. Esto converge con los objetivos perseguidos en virtud del Reglamento sobre taxonomía de la UE.

En su proyecto de propuesta, la Comisión también propone definir nuevos delitos medioambientales, como los delitos relacionados con la gestión de residuos, así como el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de buques y la extracción ilegal de agua. El proyecto es bastante ambicioso, ya que también exige a los Estados miembros que establezcan penas mínimas (por ejemplo, una pena máxima de prisión de al menos 10 años si un delito causa o es probable que cause la muerte o lesiones graves a cualquier persona) y plazos de prescripción para estos delitos. Los Estados miembros también deben proporcionar formación suficiente, así como recursos financieros y técnicos para luchar contra los delitos medioambientales. La cooperación y la coordinación entre las autoridades están prescritas para garantizar la eficacia de las investigaciones y enjuiciamientos transfronterizos.

**Propuesta de la Comisión de una norma de bonos verdes de la UE**

En julio de 2021, la Comisión propuso un [**Reglamento sobre la norma de bonos verdes de**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0391) la UE (APG de la UE) para animar a los participantes en el mercado a emitir e invertir en bonos verdes. Según la Comisión, el APG de la UE puede definirse como una norma voluntaria para ayudar a ampliar y aumentar las ambiciones medioambientales del mercado de bonos verdes. El objetivo de la Comisión es establecer un "estándar de oro" sobre cómo las empresas y las autoridades públicas pueden utilizar los bonos verdes. Al hacerlo, podrán recaudar fondos en los mercados de capitales para financiar algunos de sus grandes proyectos de inversión que contribuyen a la sostenibilidad.

El marco propuesto establece cuatro requisitos clave: alineación de la taxonomía, transparencia a través de requisitos detallados de información, revisión externa del cumplimiento y supervisión de los revisores externos por parte de la Autoridad Europea del Mercado de Valores.

La propuesta está siendo revisada actualmente por el Parlamento, que ya publicó [**un proyecto de informe**](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698870/EPRS_BRI(2022)698870_EN.pdf) en diciembre de 2021 en el que se proponen algunas enmiendas al texto de la Comisión, por ejemplo, la pérdida de la etiqueta APG de la UE al no cumplir los objetivos anuales relacionados con los requisitos para los planes de armonización de la taxonomía. En 2022, el proceso legislativo continuará en el Parlamento. A continuación, el proyecto de propuesta será revisado por el Consejo tras el procedimiento legislativo de codecisión.

**Impacto ASG en la política y la aplicación del Derecho de la competencia en 2022**

***Acuerdo entre empresas***ESG también afecta a las competencias antimonopolio.

A finales del año pasado, la Comisión publicó una [**comunicación titulada "Una política de competencia adecuada para los nuevos retos".**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:713:FIN) En su Comunicación, la Comisión reconoce que debe permitirse a las empresas cooperar para llevar a cabo conjuntamente iniciativas verdaderamente ecológicas. Por lo tanto, los acuerdos que restringen la competencia podrían quedar exentos si aportaran beneficios para los clientes que superen el daño causado, por ejemplo, reemplazando productos no sostenibles por otros sostenibles y, por lo tanto, mejorando su longevidad y aumentando el valor que los consumidores atribuyen a ese producto. Sin embargo, siguen existiendo muchas cuestiones, en particular, las inquietantes preguntas de si, qué tan rápido y en qué condiciones los encargados de hacer cumplir la competencia de la UE estarán dispuestos a aprobar convenios colectivos que beneficien al medio ambiente en su conjunto y que no generen mejoras específicas para la clase de clientes afectada por el acuerdo.

Veremos en 2022 cómo la Comisión y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros de la UE tendrán esto en cuenta y en qué medida podría quedar exento algún acuerdo que infrinja el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Este es un asunto que debe observarse de cerca, dado el coste de equivocarse, como lo demuestra la investigación de la Comisión de los acuerdos de la industria automovilística alemana relativos a la introducción de AdBlue (Asunto AT.40178 – Emisiones de automóviles, véanse tanto [**la decisión de la Comisión por la que se impone a los fabricantes de automóviles 875 millones de euros por restringir la competencia en la limpieza de emisiones de los turismos diésel nuevos como la**](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202146/AT_40178_8022289_3048_5.pdf) [**la carta en la que se explica por qué no se investigaron más a fondo determinados ámbitos de cooperación**](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202146/AT_40178_8022302_3050_5.pdf), publicada el 8 de julio de 2021).

***Ayudas estatales***

Los objetivos del Pacto Verde Europeo requieren financiación tanto privada como pública. Por lo tanto, la Comisión está revisando las normas sobre ayudas estatales para apoyar aún más estos objetivos.

La Comisión está considerando muchas acciones, como las modificaciones del Reglamento General de Exención por Categorías para el primer semestre de 2022 para tener en cuenta el Pacto Verde Europeo y la transformación digital. Este Reglamento prevé la aprobación automática de las medidas de ayuda pública que cumplan sus condiciones.

La Comisión también respaldó las nuevas Directrices sobre ayudas estatales en favor del clima, la protección del medio ambiente y la energía, que deberían adoptarse a principios de 2022.

Estas directrices actualizadas permitirán a los Estados miembros de la UE apoyar nuevos proyectos medioambientales y apoyar la movilidad limpia, la eficiencia energética en los edificios, la circularidad y la biodiversidad. También aumentarán la flexibilidad de las normas existentes al eliminar el requisito de notificación para los grandes proyectos ecológicos dentro de los regímenes de ayuda ya aprobados por la Comisión.

Como muestra esta alerta, ESG seguirá siendo un tema candente en 2022. Un gran número de empresas que operan en la UE en múltiples industrias verán sus operaciones afectadas por las iniciativas legislativas relacionadas con ESG y los desarrollos regulatorios. Las empresas deben mantenerse al tanto de estos desarrollos y estar listas para emprender todas las acciones necesarias para el cumplimiento de ESG.